

examen de de la situación política

Ramiro de la Espriella Priella

Me parece que lo que está en entre dicho en Colombia es el sistema de democracia. Más concretamente, la llamada democracia representativa. No sólo por todo cuanto se desprende de las últimas elecciones, sino por la crisis de poder —tanto en su competencia como en su jurisdicción— que aflige a los distintos órganos del estado.

El órgano jurisdiccional, por ejemplo, viene siendo malogrado en su ejercicio por la complicidad del legislativo en la burla de las funciones que le competen. Además, el mismo ejecutivo por boca del presidente de la república

y de su ministro de obras públicas pretendió interferir sus ejecutorias por medio de la creación *ad-hoc* de los tribunales de honor. Todo lo cual demuestra la profunda crisis estructural del sistema, y cómo el guerrear contra las instituciones más que un asalto que provenga de afuera es una lucha interna, de vaivenes y contradicciones rotundas, entre los mismos órganos que debían garantizar el pleno funcionamiento democrático, de acuerdo con la teoría tripartita de Montesquieu. Aquí se ha roto ese equilibrio funcional. El Congreso no se cree obligado a obedecer los dictámenes judiciales, si éstos se refieren a miembros de las dos corporaciones que lo forman. No de ahora solamente, sino de tiempo atrás, y por simples delitos comunes. El Ejecutivo ha pretendido con preconcebido espíritu encubridor que los más altos funcionarios de su rama —el hijo y secretario del presidente y su ministro de obras públicas, por ejemplo— deben ser sustraídos del exámen de la justicia competente para entregarlos a un veloz juicio de responsabilidades deslindado del procedimiento judicial conocido. Por último, después de la reforma constitucional de 1968, el órgano legislativo pasó a ser un apéndice de la voluntad presidencial, y sus tareas se redujeron a interpretar y recibir los designios del jefe del estado. La democracia de tipo francés o anglo-sajón, importada y ajena, se ha convertido, así, en una práctica acondicionada de la autofagia política, y de allí arranca el consecuente exterminio de su organización funcional. En todo esto, como acontece siempre, la oposición no ha tenido nada que ver. Es más, embebida como está en la lucha extrarritorial y el enfrentamiento de las dos grandes potencias comunistas, ni siquiera ha intentado aprovechar las circunstancias como coyuntura política favorable. Donde existen dictaduras desembozadas, el fenómeno es una consecuencia lógica de la posición política que se adopta. No así en regímenes como el nuestro auspiciados por la teoría democrática del poder, y encubiertos por su fingido ejercicio. Lo que sorprende ahora no es la distorsión de la teoría por los hechos, que eso ha sido así más o menos durante lo que va corrido de nuestra independencia política, sino las características propias de la controversia, abierta y desafiante. Y todavía un hecho más repulsivo y degradante: la absorción de poder en una solas manos y su virtual ejercicio personalista se produce como consecuencia directa de hechos inmorales, o moralmente discutibles. Es el soterrado sentimiento de que la fiscalización pública no debe dar un paso más hacia adelante lo que ha venido produciendo el recorte de las funciones propias de los órganos judicial y legislativo. El país no avanza en ese sentido. Por el contrario, retrocede. Mientras, al propio tiempo, los medios de comunicación con la ciudadanía —la radio y la televisión, por ejemplo— se convierten en un cuarto poder también sujeto a la voluntad discrecional del Presidente de la República y sus inmediatos colaboradores. De manera que el colombiano está irremisiblemente condenado a ver y oír, sin poder hablar. No era ese en su origen, por lo menos, el pensamiento que abrigaban los sostenedores de la teoría democrática del poder. Si este pensamiento se quebrara para dar paso a otra teoría, inclusive no importa qué clase de dictadura política, no habría por qué inpujarla en razón de sus objetivos y prácticas. Pero entre nosotros se trata de todo lo contrario: de explotar una idea y un sentimiento y obrar en sentido inverso.

No es cierta, así, la división de poderes propia del sistema democrático, conforme se ha visto arriba.

No se cumple ese requisito específico.

Pero como la democracia tiene, además, exacta expresión en el sistema representativo, y el voto es su modo de establecer un vínculo directo con el ciudadano, se hace indispensable examinar esta otra circunstancia para comprobar hasta dónde es verdad en cuanto a los colombianos se refiere.

Clausurado el guerrear de la independencia se abrió la posibilidad de escoger nuestro sistema de gobierno. A la idea grande de un país formado por las naciones libertadas por Bolívar se opuso el fraccionamiento multinacional. El caudillo personalista dueño de su feudo sobre su caballo destruyó toda posibilidad de un empeño hemisférico. Este mismo hecho, tal vez, hizo imposible una concepción política e ideológica nuestra y propia para nuestros problemas. Y lo más fácil que se encontró a la mano fueron los principios revolucionarios de la época y su invocación al pueblo. Ese disfraz, esa máscara, sirvió para velar el predominio feudal de los señores, la desarticulación continental, y la posibilidad de un gobierno concordante con la realidad social y económica de la época.

Las instituciones comenzaron mintiéndole al ciudadano, mientras el caudillo gobernaba a horcajadas de la opinión y el poder público se iba convirtiendo en patrimonio privado de sus detentadores.

En la constitución boliviana el Libertador pretendió encontrar la síntesis de nuestro proceso político. En su lucha contra el caudillismo pseudo liberal buscaba una salida hacia la realidad, y, al propio tiempo, trataba de asentar el poder revolucionario como tal. Contra lo que generalmente se dice no era la suya una concepción autocrática del poder, o personalista, o individual, sino el esfuerzo bien pensado por asegurar la conquista de la independencia política por medio de un gobierno serio y responsable, reflejo del medio en que le correspondía actuar. La dictadura era la consecuencia natural de la independencia y no un dique para detenerla. Lo otro fue el desborde de la demagogia, el gamonalismo, la teoría insensata, el desplazamiento político, y, finalmente, de nuevo el colonialismo.

Así hemos seguido andando hasta ahora, y ello explica el punto donde nos hallamos.

Por eso las elecciones no han reflejado jamás la opinión ciudadana ni son un medio para conocerla.

El cacique tuvo siempre un hato electoral propio, que fue de él en compañía del cura. Ese hato votó sin saber leer ni escribir y sin ninguna idea en la

cabeza. Y cuando sumado no pudo contrarrestar el hato del contradictor, o se vió en dificultades para hacerlo, se acudió al fraude al descubierto y pleno sol. Así fueron elegidos nuestros presidentes en gran parte, y una y otra vez nuestros congresistas en escándalo menos nacional porque su poder era también menor. Cuántas veces fueron víctimas de ese fraude los candidatos de los diferentes partidos? Para el caso no importa, pero lo cierto es que lo fueron. Lo mismo Guillermo Valencia que Benjamín Herrera, Carlos Arango Vélez que Darío Echandía o el General Rojas Pinilla en el siglo presente. Y ese fraude electoral contra los opositores del partido contrario era menor, todavía, que el fraude sufrido por la opinión esperanzada en las promesas de los candidatos. No se cumplió un solo compromiso. No se hizo fe de una sola promesa. La inmadurez del país corría pareja con la de sus dirigentes. A la desmoralización política debía seguir y siguió, la de las costumbres públicas y privadas. No se le podía pedir más a la ciudadanía que lo que los gobernantes le negaban por vía del ocultismo o el descaro.

Cuando el país creció y se industrializó, y el poder político dejó de depender sólo de la propiedad de la tierra la forma del voto se vió interferida por fuerzas nuevas ajenas a la voluntad y necesidades del elector. Se des poblaron los campos y las ciudades se ruralizaron con una población famélica y miserable. La democracia importada no había ahondado raíces en nuestra tierra. Los intereses económicos fueron siempre superiores a sus objetivos ideológicos. Y el poder del dinero, ya como concentración capitalista, vino a confundirse con el poder político hasta tomarlo en rehenes o hacerlo directamente suyo por delegación de amo y señor. Como la lucha que presencia el mundo es la lucha entre el poder del número y el poder del dinero, los dueños de este último ponen en juego su capital en defensa del interés material que los asiste. En tanto la gleba irredenta no tiene modos de resistir al halago como no sea por medio del abstencionismo insoluble o la resistencia pasiva. Ambas actitudes, desde luego, ilusorias e inoperantes. Pretender que en unas elecciones como las nuestras, dentro de un sistema como el nuestro, con los inocultables antecedentes de mentira y burla que ya se conocen, no juegue como factor decisivo la venalidad del voto, la posibilidad de su compra y de su venta, equivale a aconsejarle al capitalista que se despoje del capital y le abra las compuertas del poder a la masa raída y descalza. Es acaso así como se hacen los cambios estructurales de los sistemas de gobierno? Hay en la historia algún recuerdo de eso? .

Pero la verdad es que nuestra clase política, la antigua clase manzanilla, o de los intermediarios, va cediendo el paso de la gestión pública a los nuevos dueños del dinero. Aquella se conformaba con la apariencia del poder, y con el mando como una noción particular dentro de un círculo parroquial o acaso provinciano. En los actuales momentos el poder es ante todo la posibilidad de la fortuna. Se busca para asentar la fortuna y acrecerla. No se esconde ya bajo los pliegues de una ideología política, o que pretenda ser política, porque todo lo rige el éxito fulgurante, la maniobra, el golpe de sorpresa.

Y no puede estar sometido a reglas preestablecidas, a una conducta comunitaria, ni siquiera a la suposición de la ley escrita. Ha creado por sí y ante sí una situación de hecho y quebrado el llamado estado de derecho. La vieja concepción teórica de la democracia, que sirvió durante 150 años para alardear frente al país, no produce ya ningún recato a los nuevos dueños del poder político. Y, de otro lado, la ciudadanía ha terminado por convencerse de que el sistema no funciona, anda mal, y no se adivinan por ninguna parte posibilidades reales de reforma o enmienda. No es en el fondo que éste o aquél presidente sea malo, torpe, incapaz, o poco respetuoso de los caudales públicos, que todo eso puede ser cierto en mayor o menor grado, sino que las instituciones no caminan o caminan hacia atrás, en detrimento del país y con grave riesgo de su porvenir.

No parece, sin embargo, cierto que los colombianos se hayan percatado de que la ley no existe. Ni tampoco de que la autoridad ha desaparecido. Una vana nebulosa del pensamiento los mantienen atados a la pasividad inactiva, si así se puede decir. No conocen su propia realidad, y por desconocerla no la asumen. Se siente el vacío de poder, la falta de orientación hacia adelante. Pero nuestras mentes están colonizadas. Son el coto de caza cerrado de la vieja e irrealizada democracia que jamás funcionó, o de la supuesta revolución marxista que se ha ido disolviendo con el tiempo en los países que la intentaron o la soportan.

Colombia no ha encontrado su dimensión política. No tiene la certidumbre de su validez real. Ni siquiera trata de salvar obstáculos. Prefiere que la guíen como a un ciego.

El resultado de las últimas elecciones no es un hecho nuevo, sino la persistencia de hechos ya conocidos: la división burocrática de los partidos, la compra - venta del voto, el abstencionismo creciente, la estulticia degenerativa de la izquierda, la parcialidad del gobierno y la decadencia de la clase política para abrir paso a los nuevos dueños del poder económico. Todo eso ha venido desarrollándose a través de los últimos ocho, diez o doce años, y es una verdad que se renueva cada día de elecciones. No sorprende pero es un aviso constante. Y bien valdría la pena que quienes quieren hacer de Colombia un país de acuerdo con su realidad sacaran algunas consecuencias de estas lecciones.

Por qué no piensan los colombianos en un gobierno fuerte y serio? Sencillamente porque los cambios en el sistema de gobierno no los hace el consenso mayoritario de una nación, sino los riesgos, la audacia, la intrepidez, de una minoría alerta y descreída del presente. De manera que se está corriendo el peligro de que los despojos de nuestra "democracia" en el papel se conviertan en botín de una nueva clase antinacional.

Bogotá, Marzo de 1978.